

MARÍA ANDREA VORIA

**Géneros contingentes. Luchas por
el reconocimiento en contextos
de crisis social**

TESIS DOCTORAL DIRIGIDA POR LA DRA. MARÍA JESÚS
IZQUIERDO BENITO

DEPARTAMENT DE SOCIOLOGIA

FACULTAT DE CIÈNCIES POLÍTiques I DE SOCIOLOGIA

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

MARZO, 2014

SECCIÓN III: ABORDAJE ANALÍTICO

III.1 ESCENARIO HISTÓRICO DE ANÁLISIS

Introducción

El propósito de nuestro estudio exige hacer una breve lectura sobre la más reciente historia argentina, alrededor del poder hegemónico y sus resistencias desde una perspectiva de género. Ello nos brindará un marco adecuado para el estudio del género en términos de performatividad, en un contexto de crisis social y económica como la que atravesó la Argentina alrededor del año 2001.

Analizar la relación dialéctica establecida en dicho período entre estructura y acción desde la performatividad de género supone atender a las limitaciones y condiciones impuestas por parte de la estructura, a las actuaciones de género a lo largo de la historia reciente del país.

En términos históricos, se trató de la crisis argentina “más profunda e integral de su historia contemporánea, manifestada agudamente en términos económicos, financieros, sociales, políticos, institucionales y en especial como una crisis de valores que rigen las modalidades de relación social y de organización de las sociedades” (Argumedo y Quintar, 2003: 619).

Consistió en un proceso irruptivo tanto sobre lo social como sobre lo subjetivo, en tanto que ha favorecido la colectivización de las experiencias y la confrontación de proyectos políticos alternativos, y a la vez ha generado un proceso creciente de individuación de los sujetos. Si bien en nuestra investigación sólo nos centraremos en las actuaciones de género de los sujetos individuales y no colectivos a partir de determinados relatos cinematográficos, consideramos que este capítulo constituye una instancia necesaria, tanto de debate acerca del peso que ha tenido la estructura sobre las actuaciones de los sujetos, como de reflexión acerca de las resistencias colectivas, atendiendo a las fisuras de género por ellas generadas. En la magnitud y multidimensionalidad de esta crisis reside nuestro interés acerca de cómo la situación social y económica de Argentina interactúa con la normatividad de género.

Centrar nuestro estudio en los comienzos del siglo XXI en Argentina supone estudiar la historia del presente de este país, la cual no representa un período histórico clásico, sino una temporalidad que se mueve y se reinterpreta constantemente, siendo vulnerable al impacto provocado por los acontecimientos y la forma en que éstos son procesados

política, cultural y socialmente (Suriano, 2005). Tal como afirma Wortman, “la realidad cambia en forma constante, y a veces tan rápido que obliga al observador a ser sumamente creativo y flexible en sus reflexiones e interrogantes” (2008: 11).

Figuraciones sobre la crisis

El término de crisis ha sido utilizado a lo largo de la historia argentina de forma cíclica, constituyéndose en una figura fantasmática, que devela las *ficciones* sobre las que se sostiene esta sociedad. Funciona de algún modo como *fantasma* en el imaginario colectivo, con vida propia y fuera de cualquier control social, que amedrenta, amenaza e intimida con su vuelta y con su reaparición en cada nuevo escenario político e histórico, convirtiéndose en una suerte de condenación perpetua que reafirma el destino de un país. Algo así como una profecía autocumplida (Elster) que circula en el imaginario social de este país, que le da nueva vida a la crisis, haciéndola presente, volviéndola real.

Para Volnovich (2002) la crisis en tanto “discurso del sufrimiento”, revela cómo desde el nacimiento en adelante la relación del sujeto con la política transita por las marcas que ha dejado en el inconsciente la relación con el Otro. La situación de extrema indefensión social no hace otra cosa que reabrir la marca que el Otro grabó en nosotros y que, de esta manera, nos predispone, nuevamente, para quedar subordinados y desamparados frente al poder. Desde esta discursividad, la imagen de impotencia que creamos de nosotras y nosotros mismos frente a la omnipotencia del poder, no nos permite ver nuestra contribución al sostenimiento del poder a través de nuestras prácticas cotidianas y nuestro ejercicio ciudadano.

Se trata de un acontecimiento categórico y crítico, que implica a la vez todo el pasado y todo el porvenir de la acción cuyo curso marca, de modo que la temporalidad es una dimensión indisociable de la crisis (Arfuch, 2003), que de manera cíclica está impresa como destino ineludible. Por tanto su existencia, por presencia o por ausencia, por su recuerdo o por su predicción, es una constante en el imaginario social argentino, donde las crisis marcan hitos en los relatos de vida de los conciudadanos. Sin embargo, Arfuch advierte que las imágenes del paso del paraíso al infierno han logrado “desdibujar los matices, los clivajes, las diferencias, a homogeneizar lo diverso, a unificar, de modo sintético, los abismos que la desigualdad talló sin pausa en la última década” (2003: s/n).

La diferencia que Silvia Bleichmar reconoce de la crisis de 2001 respecto de otras crisis de la historia argentina, que en esta última el mayor terror está en lo que no puede ser ni siquiera articulado, *puesto en palabras*. Se trata de lo impensado, de lo no previsible,

sin que esté clara la forma que esto puede asumir. De este modo, la sociedad se ve imposibilitada de fantasmaticar de modo productivo los peligros que la acechan, y de instaurar a partir de ello estrategias defensivas que le permitan enfrentarlos (Bleichmar, 2001).

Así, la crisis adjudica el elemento de impredecibilidad a la biografía de los sujetos e imprime en sus conciencias aquel elemento que queda fuera de control. Por tanto, es al mismo tiempo contexto que nos incluye y texto que, al atravesarnos, nos constituye, de modo que se hace carne en la subjetividad (Volnovich, 2002).

Paradojalmente, la crisis en su dimensión productiva se transformó en una especie de parámetro identitario colectivo que ha unido a la ciudadanía en iguales desventuras, lo cual a nivel de la acción democrática colectiva ha tenido un impacto inédito, como veremos, en la historia reciente de la Argentina. Incluso, es en el clima de revuelta popular, que acompañó la crisis económica e institucional de 2001 y 2002 en Argentina, que emergió llamativamente un repertorio de escenas y formas visuales traducidos por distintos lenguajes estéticos, incluido el cine.

En su interrogación sobre la revuelta como operación y matriz de sentido, tanto a nivel de la cultura como a nivel de sujeto, Julia Kristeva encuentra que “la cultura de la revuelta explora la permanencia de la contradicción, lo provisorio de la reconciliación, la evidencia de todo lo que pone a prueba la posibilidad del sentido unitario (la pulsión, lo femenino, lo innombrable, la destrucción, etcétera)” (1999: 24).

Y más adelante, Kristeva afirma:

“La revuelta es nuestra mística, es sinónimo de dignidad para señalar una de las actitudes posibles. Pero sobre todo para señalar las lógicas en cambio [...] la revuelta no se realiza en el mundo de la acción sino en el de la vida psíquica y desde allí en sus manifestaciones sociales: escritura, pensamiento, arte [...]. En la medida en que se trata de una mutación del vínculo del hombre con el sentido, esta re-vuelta cultural concierne intrínsecamente a la vida de la ciudad y tiene consecuencias profundamente políticas: plantea otra política, la de la conflictividad permanente (1999:24-25).”

La conmoción social de diciembre de 2001, unido al paisaje humano y social de la crisis, inspiraron un gran activismo tanto político como simbólico en distintas manifestaciones del arte. Todos los lenguajes se movilizaron para expresar, de forma individual o a través de colectivos artísticos y con diversos procedimientos de representación, la realidad caótica de la crisis. La revuelta popular en Argentina, que analizaremos a continuación, se constituyó, entonces, como figura de cruce de lo político y lo estético.

Escenario histórico de la crisis del 2001

Para comprender la crisis sufrida en el año 2001 en Argentina, debemos retrotraernos hasta el año 1976, tanto por el inicio de la dictadura más cruel y violenta de la historia argentina, como por el comienzo de un proceso de reconversión económica y social orientado por políticas de corte neoliberal. Abordaremos a continuación ambos legados.

El legado autoritario

Los años 60 y 70 en Argentina fueron de elevada politización y de crecimiento de la radicalidad.

El derrocamiento del régimen peronista en el año 1955, la proscripción y la persecución de sus seguidores, la seguidilla de golpes militares y sus políticas antipopulares, el impacto de la Revolución Cubana, la expansión en toda América latina de un vivo sentimiento antinorteamericano, y más amplio aún, antiimperialista, caldearon la atmósfera. A eso se sumó la guerra de Vietnam y los acontecimientos que acaecían en diversas partes del mundo originados, o alentados, por estas últimas cuestiones. Todos estos acontecimientos constituyeron una incitación a la radicalidad política. La trágica muerte del Che Guevara en Bolivia en 1967, cuando intentaba crear un foco que imaginaba de grandes consecuencias para la región sur latinoamericana, y las violentas manifestaciones populares como el Cordobazo (1969) fueron detonantes para el ensayo de fórmulas revolucionarias.

Los años 60 y 70 fueron años propicios en el marco de la convulsión social a nivel tanto nacional como internacional para favorecer un escenario de mayores libertades para las mujeres – no sin resistencias y claras sanciones sociales, como veremos -. El impacto y la participación activa en los acontecimientos políticos, hacían que la vida doméstica se articulara forzosamente con las exigencias que suponía la militancia política, transformándose notablemente, en términos de género, el ritmo de la vida cotidiana.

Un aspecto destacado de esos años fue el inicio de la libertad sexual: por primera vez se extendía entre las muchachas de las clases medias la experiencia de relaciones sexuales prematrimoniales. Algo notable venía en auxilio de la liberación de la moral sexual femenina en esos años: la píldora anticonceptiva. “La Argentina se incorporaba así a una era revolucionaria, aunque la conciencia de la época estaba lejos de registrarla, tan preocupada por la otra revolución, la ‘social’” (Barrancos, 2008: 138).

En la vorágine de los cambios se destaca la incorporación masiva de las mujeres a la universidad. Si a inicios de los años 60 la matrícula femenina de todas las universidades

argentinas se aproximaba al 30 por ciento, una década más tarde esa proporción había subido a cerca del 44 por ciento (Barrancos, 2008). A su vez, la universidad resultó uno de los escenarios clave del surgimiento y consolidación de las organizaciones estudiantiles, que arrojaban una igualitaria participación de hombres y mujeres, a pesar que en la enorme mayoría de los casos fueron los muchachos quienes lideraban la conducción de las organizaciones.

Las ocupaciones con mujeres se multiplicaron. Y aunque no cambió, en absoluto, el perfil del mercado laboral, que siguió segmentado por actividades según sexo, los efectos de la mayor profesionalización se hicieron sentir y hubo una diversificación de los empleos privados y públicos. La participación en los servicios aumentó notablemente y crecieron los puestos administrativos dentro del propio aparato estatal.

Fue especialmente desde fines de la década del 60 cuando la insurgencia armada ganó una consideración decisiva, plasmándose como una vía alternativa para distintos grupos políticos. Muchísimas mujeres se incorporaron a la contienda y probablemente constituyeran la mitad de quienes componían los cuadros de esos aparatos, aunque las investigaciones disponibles demuestran que en su enorme mayoría estaban en la base, ejerciendo actividades de superficie —por lo general en frentes barriales o sectoriales—, o en la estructura intermedia, pero no en la conducción.

Los testimonios de las protagonistas ponen en evidencia las notas singulares de esa opción militarizada —tan contrapuesta con las expectativas de género—, las dificultades para lidiar con la vida familiar y los problemas casi insolubles que se les plantearon a la hora de la clandestinidad y del recrudecimiento de la represión.

La presentación social de la madre militante bajo la figura de la “madre guerrillera” supuso una manifestación radicalizada de los modelos femeninos más “progresistas” que imperaban en los años 60 y 70 en Argentina. Sin embargo, “el encuentro de los dos atributos en una única formación despiertan una disonancia social, un escándalo político, un desarreglo revulsivo e inquietante manifestado especialmente en los sectores dominantes (Domínguez, 2007:289).

Luego del golpe de Estado de 1976, las cúpulas militares desencadenaron la más violenta represión de que se tenga memoria en nuestro país e hicieron sistemático el método de la desaparición forzada de personas. Si bien los primeros asesinatos y desapariciones ocurrieron durante el gobierno de Isabel Perón, en el que se había destacado la siniestra figura de José López Rega —uno de los responsables de la Alianza Anticomunista Argentina, conocida como la Triple A, como brazo ejecutor—, esa práctica

fue enteramente legitimada como método represivo por los militares cuando dieron el golpe en marzo de 1976.

Justamente, la amenaza que suscita la madre guerrillera para el orden dado se refleja de manera dramática en las acciones que el gobierno militar ejecuta contra las mujeres. “La dictadura ataca de forma despiadada sus cuerpos, tortura a las embarazadas arrebatándole sus descendencias. Produce así uno de los delitos más aberrantes que es “la apropiación de niños” y constituye con ello otra de las contracaras asesinas del discurso familiarista y moralizador que difunde y proclama” (Domínguez: 2007: 289-290). De acuerdo con la investigación de la CONADEP (Comisión Nacional por la Desaparición de Personas) que dio lugar al “Nunca Más”, muchas mujeres fueron sometidas a atroces padecimientos y desaparecieron en los campos de concentración – una proporción cercana al 30% del total de la población detenida ilegalmente -.

“Sin duda, hay una diferencia de género en los atributos de los que se invistió el horror del terrorismo de Estado: las violaciones, las condiciones del parto y el secuestro de los recién nacidos aumentaron la victimización de las mujeres [...] No sostengo, absolutamente, que las mujeres sufrieran más que los varones, sino que les fueron infligidos repertorios más amplios de suplicio, hubo más alternativas para el sufrimiento” (Barrancos, 2008: 147-148).

Como afirma Domínguez (2007), todas estas acciones hablan de una politización estatal de la maternidad que se sostiene en hechos extremos de desmaternalización y des-filiación.

Según Pilar Calveiro (1998), para el régimen militar la “subversión” era “peligrosa” no solamente en términos políticos, sino que estaba asociada a la ruptura de valores morales, familiares, religiosos. La subversión era algo que iba más allá de lo político. Así, los militares veían a las mujeres como doblemente subversivas, tanto en relación al orden político, como al orden familiar, en tanto habían roto con el lugar de madres y esposas.

Paradójicamente, Calveiro advierte, en relación a la sobrerrepresentación de mujeres en el universo de los sobrevivientes a los campos de concentración de la última dictadura militar en Argentina que, la situación de desventaja que las mujeres tienen en cualquier esquema machista puede invertirse y jugar a favor en determinadas circunstancias. Las “ventajas relativas” para las mujeres, según ella, pudieron tener que ver con la percepción por parte del régimen militar de una menor peligrosidad, asociada a la supuesta debilidad de su género. También, en este sentido, abundó la idea de que las mujeres habían sido puestas en riesgo por la “irresponsabilidad” de sus maridos, de la que los militares podrían aparecer como “salvadores”, en contados casos, muy específicos. Por otra parte, todos los ejércitos han tratado de adueñarse de las mujeres de los vencidos y entonces, el hecho

de preservar a aquellas que casualmente fueran esposas o compañeras de dirigentes políticos es una forma de poder sobre los “vencidos” (Calveiro, 1998).

En términos performativos, la autora asume la capacidad de resistencia de las mujeres, incluso en las situaciones más hostiles, lo cual en este contexto histórico les permitió, en algunos casos, actuar con más habilidad en la situación de secuestro, buscando resquicios y encontrándolos, cuando la suerte las acompañó. En este sentido, para Calveiro en la situación del golpe del '76 la asimetría entre lo que fue el proyecto revolucionario y la guerrilla, por un lado, y el poder militar por otro, es clarísima, no sólo en términos de fuerzas desiguales sino también en términos de proyectos y propuestas antagónicas. En palabras de la autora:

“Esta asimetría se profundiza dramáticamente, hasta el extremo, dentro de los campos de concentración, pero eso no quiere decir que quien está en posición de desventaja sea una víctima inerte. Es alguien que se mueve, que tiene voluntad y que tiene la capacidad de actuar dentro de esas relaciones de poder completamente desiguales. El hecho de sacarlo de la supuesta condición de víctima inerte no le quita nada sino que le agrega. La víctima inerte es el lugar del sujeto paralizado. Y creo que ésa fue precisamente la intención del poder militar: paralizar a la sociedad y paralizar toda resistencia, toda oposición, pero finalmente no lo logró. Sólo lo logró parcialmente en algunos momentos. Del otro lado del pretencioso poder militar, hay otros que se mueven, desde una posición de sujeto inteligente, activo. Justamente poner el acento en esa parte no diluye la injusticia. Por el contrario, olvidar la resistencia es pensar que puede haber un poder total. Pero el poder total sólo es una ilusión del Estado –desde Leviatán para acá-. En realidad el poder total es imposible. Precisamente porque los sujetos son activos y siempre están buscando y encontrando las formas de escapar” (Calveiro entrevistada por Moreno, 2000: s/n).

De madres a *Madres*

Bajo el gobierno surgido del golpe de Estado de 1976, se impuso como norma el terrorismo de Estado y las libertades públicas e individuales fueron violadas brutal y sistemáticamente. De esta manera, desde un Estado controlado por las Fuerzas Armadas, se profundizó la desintegración social al imponer un verdadero régimen de terror que apelaba a la eliminación y desaparición sistemática de personas, y que tuvo las características de un verdadero genocidio.

Amparados en el control de la suma del poder político al haber eliminado las instituciones democráticas y republicanas, los militares organizaron una represión clandestina que recurría a los “grupos de tareas” de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas encargados de secuestrar a opositores políticos, que eran recluidos en centros clandestinos de detención hasta ser asesinados con total impunidad (Suriano, 2005).

Durante los primeros años de la dictadura iniciada en 1976, signados por la proscripción de los partidos políticos y los sindicatos en el marco del terrorismo de Estado, los movimientos sociales que emergieron se orientaron principalmente a la reivindicación de los derechos humanos, entre ellos, destaca principalmente el de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo por su valentía para enfrentarse al poder genocida de la dictadura militar y ocupar el espacio público en reclamo de sus hijos e hijas desaparecidas.

Así, fueron mujeres las que llevaron adelante la más contundente de las oposiciones a la feroz dictadura que se extendió entre 1976 y 1983.

“Al disponer de la vida de sus hijos, el gobierno de facto agrade a estas mujeres en su maternidad, es decir, en lo más consustancial de su identidad correspondiente con el lugar social que les es asignado. ¿Transgreden ellas estas leyes al reclamar pública y colectivamente por la vida de sus hijos? ¿En qué medida reafirman o renuevan la imagen tradicional de la mujer?” (Rosenberg, 1996: 260).

En los orígenes de la resistencia al terrorismo de Estado, las Madres se apropiaron de la Plaza de Mayo - lugar emblemático histórica y políticamente de la Ciudad de Buenos Aires - y de otras plazas del país, para sembrar allí la denuncia del genocidio, y reclamar la aparición con vida de los 30.000 desaparecidos y desaparecidas. Desde entonces, la Plaza de Mayo quedó asociada a sus nombres, pero también a una manera de hacer historia, que es la *presencia* de sujetos que denuncian *ausencias*. “En un capitalismo que todo lo ha privatizado, las Madres socializaron lo que para la cultura burguesa ocupa el lugar máspreciado de la vida privada: la maternidad” (Korol, 2004: 26).

Esta salida a la plaza pública de un grupo de madres que demandan al estado por la aparición de sus hijos y así visibilizan su trágica situación de una manera fuera de lo común es denominado por Nora Domínguez como “la toma de la palabra” (2007).

La acción de las Madres tiene un alto potencial performativo en más de un sentido: En primer lugar, en términos de la apropiación y resignificación del espacio público, en especial de la Plaza de Mayo, como espacialidad histórica clave en términos del ser nacional. La ocupación de un ámbito público tradicionalmente vedado al género femenino, da lugar intempestivamente en tiempos dictatoriales a “una ocupación diferente de los sitios de enunciación” (Domínguez, 2007: 283). Así, se convierten en Madres de la Plaza, “Madres de un lugar, del lugar mítico de origen de la voluntad política de nuestro pueblo de advenir a una vida independiente (Rosenberg, 1996: 260).

En palabras de Josefina Ludmer,

“La treta (otra típica táctica del débil) consiste en que, desde el lugar asignado y aceptado, se cambia no solo el sentido de ese lugar sino el sentido mismo de lo que se instaura en él. Como si una madre o ama de casa dijera: acepto mi lugar pero hago política o ciencia en tanto madre o ama de casa. Siempre es posible tomar un espacio desde donde se puede practicar lo vedado en otro; siempre es posible anexar otros campos e instaurar otras territorialidades. Y esa práctica de traslado y transformación reorganiza la estructura dada, social y cultural: la combinación de acatamiento y enfrentamiento podrían establecer otra razón, otra cientificidad y otro sujeto del saber” (citado por Domínguez, 2007: 336, nota al pie 4).

En segundo lugar, la *ronda* para la que históricamente se reúnen cada semana y se disponen juntas a recorrer en círculo alrededor de la Pirámide de Mayo¹¹, repetida e incansablemente, alude a una acción performativa que - en respuesta a una orden de la dictadura según la cual no podían permanecer en la Plaza inmobilizadas - en la que invierten significativamente su sentido autoritario y arbitrario.

“Cada vuelta sobre sus pasos ya repetidos tantas veces, cada vuelta, la misma vuelta de siempre, las aleja tanto de la consecución de su único objetivo inicial, la recuperación del hijo, como de su forma de ejercer esa demanda. (...) Demanda de que no quede a merced de la madre la declaración de la muerte del hijo. (...) Demanda de un acto jurídico que convalide su dolor o su esperanza. Los hijos cuya aparición con vida reclaman, no son ya reclamados en tanto hijos de su carne, sino en tanto pertenecientes a su comunidad social y política” (Rosenberg, 1996: 261).

En tercer lugar, la reinterpretación de los pañales de sus hijos desaparecidos como los pañuelos blancos sobre sus cabezas - símbolo por excelencia de las Madres de Plaza de Mayo - refiere a que “un pañal hecho pañuelo es un arma de resistencia” (Korol, 2004: 29). Así, reafirmando su identidad de madres es que se convierten en sujetos políticos.

La conmoción que sufre la domesticidad de las madres, una vez convertidas en sujetos políticos (Madres de Plaza de Mayo), se refleja en sus relatos sobre cómo se las arreglaban para ajustar lo doméstico y el cuidado de sus otros hijos con su participación militante en la vida pública. Esa fue la razón, por ejemplo, de porqué optaron por el día jueves como día para hacer la ronda de las Madres: “Descartamos el lunes como día de reunión porque el lunes hay que lavar la ropa. Mejor el jueves, dijo alguna, y quedó el jueves” (testimonio recuperado por Martha Rosenberg, 1996: 262).

“Salía después de lavar la ropa, después que dejaba todo planchado, después que estaba la comida hecha. ¿Viste cómo entonces *va surgiendo lo otro*? Lo otro es formar algo nuevo, que te arranca de tu casa, y a medida que formaste eso, te vas haciendo un compromiso. Es un *pacto*, nosotros *vamos a luchar por todos*, hasta por aquéllos cuya madre no sale, porque no puede o no toma la decisión

¹¹ A los pies de la Pirámide de Mayo, descansan las cenizas de Azucena Villaflor, fundadora de Madres de Plaza de Mayo, asesinada por la dictadura militar.

(...) No hubo tantas madres como desaparecidos. Hubo madres que no pudieron enfrentar las dos situaciones, si salís a la calle... los dos frentes, porque después de todo era como dos dictaduras, la dictadura doméstica y la dictadura militar (...) No fue fácil y perdimos mucho como mujeres. Ganamos como mujeres ante la sociedad, ante el mundo, y perdimos adentro de nuestra casa. (...) Me cuesta, me costó mucho salir a luchar, porque adentro mío, yo soy una ama de casa" (testimonio recuperado por Martha Rosenberg, 1996: 263).

Es decir que, entre el cuidado de la casa y su familia, y la participación política subsistía una jerarquización de *prioridades*: sólo luego de desempeñar obedientemente su función de "madres" en el ámbito doméstico podían volverse "Madres" en el ámbito público.

Por último, se produce una impugnación de las relaciones sociales así como una redefinición de los significados hegemónicos en torno a madres e hijos. La distinción entre "Madres" y "madres" es discursiva y políticamente significativa, a partir de la socialización de los hijos. Es decir que, a partir de una operación discursiva en la que las Madres "toman la palabra" los hijos desaparecidos se vuelven hijos de todas las Madres. Así cada nuevo nieto recuperado es una celebración de la Maternidad y la Abuelidad con mayúsculas; incluso hoy en día en Argentina cualquier ciudadano puede sentirse un nieto abrigado al calor de las Abuelas de Plaza de Mayo. "En este sentido, por cierto, existe una modificación de la división entre espacios privado y público, desde que el atributo de "hijo" no depende del lazo de sangre sino de la experiencia política" (Filc, Judith, citado por Domínguez, 2007: 286).

Justamente, plantearemos un diálogo y un paralelismo en relación al maternaje de Félix con Chango, más allá del lazo sanguíneo, en el film *El Cielito*, entendiendo que en la cultura argentina en momentos históricos de fuerte politización social y crisis política también se conmueve y politiza la función materna (Domínguez, 2007). Sin embargo, "no hay duda de que las crisis han permitido, a lo largo de los tiempos, hacer visible la participación de las mujeres. El problema —y la incógnita— es por qué, cuando las aguas vuelven a su nivel, las mujeres son repuestas a su mismidad, a los lugares y las funciones del arquetipo de los sexos" (Barrancos, 2008: 175).

Si bien las Madres recurren a un discurso condescendiente con la normatividad de género, su misma iterabilidad invierte el carácter de su condición subordinada. La "toma de la palabra" produce, según Domínguez "un viraje en el relato hegemónico de la maternidad que es cultural y a la vez político" (2007: 283). Así, a partir de una estrategia tanto *discursiva* de "tomar la palabra", como *corporal* que supuso para ellas "poner el cuerpo" (Sutton, 2007) fueron develadas las distintas capas de sentido que resonaban sobre la construcción de la idea de madre. Sin embargo, la emergencia de nuevos sentidos

subalternos de ningún modo supone el desvanecimiento de las versiones hegemónicas, sino que en cada escenario histórico-político se generan conexiones, discontinuidades y mixturas de sentidos en permanente disputa.

En otros términos, quienes llevaron adelante este plan siniestro de exterminio jamás pensaron este efecto fundamental. Es a través de la acción performativa materna, escrupulosamente obediente al defender la vida de sus hijos, cuya “obediencia tiene un efecto bumerang” (Rossi, citado por Domínguez, 2007: 336, nota al pie 3).

Si bien las Madres enfatizaban públicamente su rol de madres y tomaron la decisión de mantenerse al margen de las contiendas político-partidarias, con la intención tanto de legitimar su participación política en términos obedientes con los mandatos de género imperantes, como de proteger a sus compañeros, padres de sus hijos, de la represión despiadada (Barrancos, 2008); los militares, sin embargo, trataron de desacreditar su accionar, considerándolas como malas madres por criar hijos “subversivos” y por ocupar el espacio público al cual no pertenecían (Sutton, 2007).

Así, los represores comenzaron a llamarlas “locas”, aludiendo discursivamente a la clara transgresión de género que tenían el atrevimiento de cometer públicamente. En otras palabras, “La irrupción que se produce es percibida desde el poder como una malformación y, en tanto no puede ser captada por los sistemas de conceptualización imperantes, es empujada hacia una exterioridad donde sus responsables son designados como locos o subversivos” (Domínguez, 2007: 284).

A tal punto que, cuando las Madres de Plaza de Mayo se disponían a publicar la primera solicitada que reclamaba por el paradero de sus hijos, el 10 de diciembre de 1977 fueron desaparecidas un grupo de Madres, entre las que estaba Azucena Villaflor, una de las fundadoras de Madres. Arrojadadas al mar con vida (dispositivo atroz de la dictadura militar que se conoce como los “vuelos de la muerte”), sus restos fueron encontrados años después en la costa del Río de la Plata; sepultados como NN. Finalmente, sus cuerpos fueron reconocidos en el año 2005 por el Cuerpo de Antropología Forense. De este modo, su activismo y su participación política le infundieron a la maternidad una dimensión innegablemente política (Sutton, 2007).

Por su parte, Las Abuelas de Plaza de Mayo surgieron frente a la evidencia de que a algunas jóvenes las habían secuestrado sin que nada se supiera de sus niños pequeños, y que muchas estaban embarazadas al momento de la detención. Con el tiempo se supo que la apropiación ilegal de niños por la dictadura constituía una práctica sistemática. Hoy en día, tras 35 años de lucha incansable de Abuelas de Plaza de Mayo, se ha restituido

hasta la fecha la identidad de 110 nietos y nietas, de un total de aproximadamente 500 nietos desaparecidos.

Con la vuelta de la democracia en el año 1983, el reconocimiento a nivel nacional e internacional, así como el significado en términos de género tanto de las Madres como de las Abuelas es abrumador: “unieron rituales domésticos y escenarios públicos, dieron nuevo significado al tránsito entre la casa y la plaza” (Barrancos, 2008: 153-154).

A través de estos ejemplos históricos paradigmáticos, se observa cómo determinados rasgos idealizados de la feminidad pueden ser invertidos significativamente y utilizados estratégicamente para encarar acciones transgresoras con las normas de género. En el caso histórico de Las Madres de Plaza de Mayo, ellas afirmaron su identidad como grupo en su maternidad para reclamar al Estado por la aparición de sus hijos e hijas, a través de modalidades de expresión hasta ese momento censuradas por la dictadura militar. Haber logrado politizar la maternidad ha tenido un impacto considerable en Argentina tanto sobre lo colectivo como sobre lo subjetivo, que perdura hasta hoy en día.

Incluso, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo han ido ampliando su perspectiva al incorporar las nuevas generaciones de derechos humanos: derechos sociales, culturales y de autodeterminación de los pueblos (Argumedo y Quintar, 2003), de modo que se han solidarizado y han apoyado comprometidamente las resistencias populares y las luchas sociales surgidas en democracia.

De este modo, como apunta Nora Domínguez (2007), estos sujetos muestran los vínculos entre maternidad y política o, mejor dicho, cómo se constituyen maternidades políticas en relaciones específicas con diferentes modelos de Estado. Así, las respuestas maternas pueden ser funcionales y complementarias o contestatarias y críticas a las políticas oficiales. Este último es el caso de las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo.

Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo se convierten así en un antecedente clave de los movimientos sociales en la Argentina, al cual debemos atender tanto por su relevancia en términos políticos como de género.

El legado neoliberal y su implosión en diciembre de 2001

La historia económica argentina del último cuarto del siglo XX y los primerísimos años del siglo XXI estuvo hilvanada alrededor del endeudamiento externo y la “desindustrialización”, a través de sucesivos gobiernos tanto democráticos como autoritarios, signado también por la permanente tensión entre el papel del Estado y el del mercado en la determinación del curso de la economía nacional (Damill, 2005).

El colapso económico de los años 2001 y 2002 en Argentina tiene su origen en la instauración de un modelo económico de corte neoliberal a partir del golpe militar de 1976, que dio la espalda a un modelo de crecimiento económico centrado en el rol del Estado y en un “modelo de sustitución de importaciones”, donde la actividad industrial había adquirido cierta relevancia a mediados del siglo XX, donde el crecimiento había sido orientado hacia el mercado interno, protegido hasta ese momento de la competencia de las manufacturas importadas por restricciones al comercio.

Dicho modelo neoliberal tuvo su apogeo bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem (1989-1999), quien, orienta su política económica hacia el fin del intervencionismo estatal, la privatización de empresas públicas, el ajuste fiscal, la condena al capitalismo protegido y la apertura de la economía.

Así, el país experimentaría a partir de entonces, a lo largo de toda una década, uno de los procesos más radicales de reforma económica orientados por el enfoque de libre mercado llevados adelante en el mundo en desarrollo. Las reformas liberalizantes tomaron impulso al mismo tiempo que se encaraba el programa de estabilización de precios basado en la fijación del tipo de cambio y en el establecimiento de la convertibilidad (Damill, 2005).

La aplicación de estas políticas fueron propiciadas por organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, las cuales generaron un debilitamiento del rol del Estado, en favor de capitales extranjeros como de los grupos económicos locales dominantes, para quienes la especulación financiera ha sido en las últimas décadas el elemento fundamental para la obtención de ganancias (Argumedo y Quintar, 2003).

La Argentina se orientó, así, obedientemente a los dictámenes emanados del Consenso de Washington, según el cual la Argentina debía renunciar a la política monetaria y establecer fuertes restricciones a la política fiscal para superar la inestabilidad macroeconómica que había caracterizado los últimos años del gobierno de Ricardo Alfonsín (1986-1989). La Argentina debía, además, abrirse completamente a los flujos internacionales de comercio y de capitales, confiando en el papel estabilizador de los mecanismos de mercado y en un efecto favorable de este cambio de orientación sobre la eficiencia económica y el crecimiento.

La ficción económica en la que fue sumida la Argentina tuvo su primer cortocircuito en el marco de la crisis del Tequila de 1995, donde comienza a quedar de manifiesto sus limitaciones al enfrentar un escenario internacional adverso. En este contexto, la reducción

del flujo de capital externo provocó una paulatina caída en el nivel de actividad, que repercutió fuertemente en la situación fiscal del país. La necesidad de financiamiento externo por parte del gobierno argentino llevó a pagar altas tasas de interés y a depender crecientemente de los organismos multilaterales de crédito para poder hacer frente a las obligaciones externas (Feijóo, 2003).

Durante todo el año 2001, la agudización de la recesión económica aumentó la fuga de capitales hacia el exterior. La posible variación del tipo de cambio condujo a una sistemática corrida hacia posiciones financieras más sólidas, como el dólar estadounidense. La imposibilidad del sector financiero de devolver los depósitos en la moneda de origen ante una eventual alteración del tipo de cambio, condujo a un retiro masivo de depósitos del sector financiero local. Esta situación económica lleva al gobierno de turno a instaurar sorpresivamente el 4 de diciembre de 2001 el “corralito” financiero, por parte ministro de Economía Domingo Cavallo. Esta disposición supuso que la ciudadanía encontrara, de un día para otro, sus depósitos bancarios inaccesibles, con una limitación máxima de las extracciones en efectivo por semana, mientras que quedaban habilitadas las transferencias bancarias o la extracción por tarjetas de crédito o débito.

Dicha medida restrictiva no tenía en cuenta a la población no bancarizada, a los trabajadores del sector informal de la economía, ni a los comerciantes que carecían de mecanismos para acceder a liquidaciones vía tarjeta de débito, imponiendo así un corsé adicional a los gastos en efectivo que constituían el mayor volumen de transacciones por parte de los sectores más postergados. A pesar de ello, tal decisión no logra esconder el hecho de que el gobierno se encuentra ante una crisis financiera sin precedentes. A diferencia de la crisis del Tequila de 1995, la corrida fue mayor y la fuga de capitales se canalizó esencialmente hacia el exterior.

El corralito financiero contrae abruptamente el nivel de actividad, como resultado de la reducción del circulante de una economía sólo parcialmente bancarizada. El efecto inmediato de estas medidas fue la restricción de los gastos de los trabajadores del sector formal de la economía y, para los informales, la ruptura total de la cadena de pagos (Feijóo, 2003). Así, en las primeras semanas del mes de diciembre del año 2001 van sumándose paulatinamente puntos de malestar y conflicto.

En simultáneo con la crisis financiera, la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA)¹² encabezó un proceso de construcción de opinión pública y de expresión de la voluntad

¹² La Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) es una central obrera, nacida a partir de la separación de un grupo de sindicatos de la Confederación General del Trabajo (CGT) en 1991, disconformes con la posición

ciudadana, centrado en la reelección de firmas para un movimiento denominado Frente Nacional contra la Pobreza (FRENAPo) que realizó una consulta popular en las que se recogieron alrededor de dos millones y medio de firmas, dirigidas a promover el diseño de un proyecto de subsidio a los desocupados, un salario universal por hijo y otro para todo mayor de 65 años sin otros ingresos (Kohan citado por Feijoó, 2003). Aunque su viabilidad presupuestaria fue puesta reiteradamente en duda, la alta adhesión de la ciudadanía expresó el reconocimiento de la pobreza como el más grande problema social que se estaba abordando.

Asimismo, una serie de saqueos habían comenzado a mediados de diciembre en el conurbano de Buenos Aires y en otras ciudades del interior del país, que presentaban altos niveles de desocupación. Esa manifestación expresaba la dificultad de la población de poder alimentar a sus familias, consecuencia de la mencionada ruptura en la cadena de pagos a los trabajadores informales, sumada a la creciente pobreza que alcanzaba prácticamente la mitad de la población¹³ (Feijoó, 2003).

La noche del 19 de diciembre, ante el creciente malestar de la población, el presidente De la Rúa, estimulado a salir del conflicto fortaleciendo su poder mediante la instauración del “estado de sitio”, despertó en la ciudad de Buenos Aires un imprevisto cacerolazo¹⁴. De la salida a la esquina de vecinas y vecinos, la marcha no planificada a la Plaza de Mayo tardó pocos minutos en producirse. Una multitud con las ollas que tenía a mano, ocupó el espacio público callejero y avanzó como una pueblada hacia el símbolo de poder político nacional por antonomasia (Feijoó, 2003).

Ese cacerolazo, fundante de una nueva fase de la vida ciudadana argentina, “fue a la vez expresión de protagonismo, alegría y hastío y se convirtió en bronca, cuando la represión indiscriminada atacó una muchedumbre en chanquetas que había salido de su

adoptada frente al gobierno de Carlos Menem. En un principio la CTA estuvo conformada principalmente por organizaciones sindicales que nucleaban a trabajadores del sector público separados de la CGT, y luego fueron afiliándose diferentes sindicatos también del sector privado.

¹³ Fuente: Onda de Encuesta Permanente de Hogares (INDEC), octubre de 2001.

¹⁴ Cacerolazo —también conocido como cacerolada, caceroleada o caceroleo— es una forma de manifestación autoconvocada o que responde al llamado de una fuerza política u otro tipo de organización, generalmente en contra de un gobierno o de determinadas decisiones o políticas gubernamentales, y más raramente a favor de una causa. Su característica más destacada, y que la distingue de otros tipos de protesta, radica en que los manifestantes expresan su descontento mediante ruido acompasado, a una hora acordada de antemano (o en otros casos en forma espontánea), desde sus propias casas y sin necesidad de concentrarse en un lugar determinado, asomándose a ventanas y balcones o en los antejardines de las casas, y blandiendo rítmicamente los objetos que tienen a mano (comúnmente, cacerolas, ollas y otros utensilios domésticos; de ahí su nombre), pudiendo de esta manera alcanzar la protesta un alto grado de adhesión y participación.

casa a estar con sus vecinos y a la que el fluir de la historia condujo a los íconos del poder institucional, el Congreso y la Plaza de Mayo” (Feijóo, 2003: 116).

El día siguiente fue el de la tragedia. Desde la mañana del 20 de diciembre, militantes organizados y militancia espontánea se juntaron camino a la plaza y en las principales avenidas que conducían a ella y se encontraron con un violento y desmesurado nivel de represión policial. Así, el día culminó con 36 muertos en distintas ciudades del país y la renuncia sorpresiva del presidente De la Rúa.

Así es como llegamos a finales de 2001, año que la Argentina se sumergió en una de las más graves y profundas crisis de toda su historia. A partir de la instauración del llamado “corralito”, que limitaba el retiro de efectivo y la disponibilidad de los depósitos bancarios, en sólo un mes el país vivió una sucesión de hechos extraordinarios que daban cuenta de la magnitud del derrumbe: la anunciada ola de saqueos que abarcó a gran parte del país; el decreto del estado de sitio; los masivos “cacerolazos” en la ciudad de Buenos Aires y el resto del país; la represión abierta y brutal, que tuvo un saldo de 36 muertos; la renuncia del Presidente de la Rúa y la sucesión de cinco mandatarios presidenciales en sólo diez días (Svampa, 2005).

El saldo social

Los efectos de la crisis de 2001 en Argentina han sido de tal envergadura que dieron como resultado una reconfiguración de la estructura social de este país, que ocasionó a nivel de la ciudadanía un gran desconcierto y una puesta en juego de su supervivencia tanto material como social. La estructura social argentina pasó de caracterizarse históricamente por un modelo de integración social, organizado alrededor del trabajo, que aseguraba canales importantes de movilidad social ascendente, a ser un país en el que el trabajo perdió en dicho contexto su centralidad como engranaje de integración social, al volverse intermitente, ocasional y precarizado.

En otras palabras, la diferencia fundacional entre el viejo país y el actual se refiere al descentramiento paulatino de relaciones sociales alrededor de las cuales se organizó la vida de la población, a partir de una “sociedad salarial” en referencia a aquella en que el trabajo era fundante de las relaciones entre las personas, debido a su carácter de fuente primordial de constitución de la identidad y de la subjetividad. En ese país, la gente era fundamentalmente lo que hacía en el mundo del trabajo y ese *hacer* en el mundo del trabajo era el principio organizador de la vida cotidiana. Así, trabajo y movilidad social ascendente configuraban un modelo de inversión cuya meta orientadora era el “progreso”, donde tenían prioridad el gasto en vivienda, educación, salud (Feijóo, 2003).

Kessler y Di Virgilio (2008) a apelan a la noción de “pauperización” para dar cuenta de un proceso de dislocación de la cotidianeidad que va afectando tramos de sentido sedimentados: ideas, creencias, expectativas, categorías de percepción, hasta entonces dadas por descontado, que no resisten el impacto de la crisis. La pauperización se experimenta como una dislocación personal y como una desorganización del mundo social circundante.

En consecuencia, el empobrecimiento de una parte importante de la clase media significó un corte abrupto con el modelo generacional y con el modelo histórico-cultural hasta entonces - signado por la movilidad ascendente de cada generación respecto de la anterior -, se expresaba en una situación de ilegibilidad general, cuya manifestación más notoria era la dificultad para tipificar el nuevo contexto y, así, apelar a un repertorio de estrategias internalizadas para enfrentarlo, tanto a nivel performativo como discursivo.

El fenómeno de la pauperización se enmarca en un proceso histórico en el que Argentina pasó de ser un país productivo basado en el modelo de sustitución de importaciones, fundado en el desarrollo industrial y cuyo destino principal era el abastecimiento del mercado interno, que favoreció en consolidar una importante clase obrera con altos porcentajes de organización y sindicalización, a un país orientado a los servicios y a la inversión financiera, que indujo a la destrucción del aparato productivo y consumó la desindustrialización con la consecuente expansión del desempleo y la reducción de los ingresos (Lozano, 2001), con un declive de las formas organizativas laborales, con altos índices de desocupación y subocupación (Wortman, 2008), pero a la vez con una presencia cada vez mayor de las mujeres en el mercado de trabajo (Svampa, 2005).

En este nuevo marco social, atravesado por una fuerte dinámica de polarización, todas las clases sociales sufrieron grandes transformaciones, tanto en lo que concierne a su composición socio-ocupacional, como al peso político y económico de cada una de ellas en el espacio social (Svampa, 2005). Sin embargo, las consecuencias de dichas transformaciones han sido muy distintas para unos y para otros, acentuándose notablemente la brecha entre *los que más tienen* y *los que menos tienen*.

Para Lozano (2001), el proceso de creciente desigualdad de distribución del ingreso no sería una consecuencia no deseada del modelo económico sino, por el contrario, el eje de construcción de un nuevo orden dominante, en el cual justamente los sectores medios son reducidos por su potencial capacidad política y contestataria y en el que el

empobrecimiento de un sector amplio de la población ha sido parte de un todo sistémico que supuso el enriquecimiento de un sector muy reducido de la población (Minujin, 2001).

En el marco de las transformaciones de la nueva estructura social argentina, el Estado se volvió ausente, invisible, dando paso a la lógica de mercado como impulsor y a la vez regulador de dichos cambios. Las consecuencias del debilitamiento del Estado son evidentes y marcan un claro cambio de rumbo, de un Estado Social orientado históricamente hacia la tarea nada fácil de producir cierta cohesión social, a un Estado débil que terminó por acentuar las desigualdades existentes (Svampa, 2005).

La velocidad del proceso de cambio social dirigido al reemplazo del viejo modelo de integración social por otro distinto fue más rápida que la percepción que los sujetos lograron tener de dicho cambio. Así, subsistieron viejas identidades en un contexto del que rápidamente habían desaparecido aquellas condiciones objetivas sobre las que se fundaron (Feijóo, 2003).

En los últimos veinte años del siglo XX toma lugar, entonces, proceso centrado en el pasaje de una sociedad de integración a la actual de tendencias excluyentes, de la homogeneidad intraclases y grupos sociales a un grado de heterogeneidad inédito en nuestra historia contemporánea, reemplazado por otra sociedad donde reina la diversidad en cada uno de los dos sectores que la integran, que ya no son sólo diferentes sino profunda e insalvablemente desiguales, y que se muestra desintegrada en relación con su funcionamiento.

De este modo, la contracara de las políticas de corte neoliberal ha tenido un coste altísimo a nivel social para la Argentina. Las medidas más importantes que condujeron hacia un modelo de “sociedad excluyente” (Svampa, 2005) durante aquella década fueron la reforma del Estado, que incluyó la privatización de sus empresas y el despido masivo de empleados y obreros, la apertura indiscriminada de la economía —que trajo como consecuencia una reducción extraordinaria del parque industrial y de la fuerza de trabajo— y la precarización laboral, que extinguió el antiguo régimen de protección a los trabajadores.

Esto significó para los sujetos la entrada en la precariedad, e incluso la pérdida de los soportes sociales y materiales que durante décadas habían configurado las identidades sociales (Svampa, 2005), lo cual provocó que la ubicación de los sujetos dentro de la estructura social no tenga la claridad que tenía tiempo atrás (Minujin, 2001).

El crecimiento de la pobreza a raíz de la desocupación, la subocupación, el retraimiento del Estado y la pérdida de cobertura de los derechos sociales, fue consecuencia de estas medidas. Si comparamos, en 1974, la población argentina en condiciones de pobreza rondaba el 7%, mientras que en 2002 esa proporción alcanza al 53% de los habitantes, a lo cual debe sumarse un 20% situado inmediatamente por encima de la línea de pobreza y otro 20% que sufrió un marcado descenso de sus ingresos y niveles de vida (INDEC, 2002).

Con respecto al empleo, en 1974, este país mantenía niveles históricos de desempleo que rondaban alrededor del 3%, mientras que a mediados de 2002 la desocupación abierta superaba ampliamente el 20% y una proporción similar correspondía a la subocupación, como forma de desempleo encubierto. Esta degradación de las condiciones de vida de la población se dieron en el marco de una creciente desigualdad social: en 1974, el 10% por ciento más rico de los perceptores de ingresos recibía 12 veces más que el 10% por ciento más pobre; en 2002 la diferencia llega a 30 veces (Argumedo y Quintar, 2003).

Durante los años '90 en Argentina se acentuó considerablemente la tendencia histórica de las décadas anteriores respecto al crecimiento progresivo de la tasa de actividad femenina. La tasa específica de actividad de las mujeres de 15 a 65 años se incrementó en 7,6 puntos porcentuales entre 1990 y 2002, pasando del 43,2 al 50,8%. En el mismo período, la tasa de actividad de los varones cayó en 3 puntos porcentuales, pasando del 81,3 al 78,3%, por lo cual se observa una disminución de la brecha entre mujeres y hombres (Ministerio de Trabajo, 2005). Es importante destacar que las mujeres que se incorporaron en mayores proporciones al mercado en estos años continuaron siendo las casadas y unidas, en su mayoría cónyuges del jefe de hogar (Wainerman, 2005).

La dinámica general del mercado de trabajo durante el período señalado, implicó que este aumento de la incorporación de las mujeres se tradujera más en un incremento de sus niveles de desocupación y subocupación que en un alza de su tasa de empleo. Mientras la tasa de empleo ascendió sólo 1,2 puntos porcentuales en todo el período, la desocupación femenina pasó de 7,6% a 18,9% y la subocupación de 14,3% a 25%. Al mismo tiempo, las tasas de desocupación y subocupación masculinas también crecieron dramáticamente, descendiendo la tasa de empleo. Esto último redujo, a su vez, la brecha entre tasas masculinas y femeninas de empleo (Ministerio de Trabajo, 2005).

A pesar de cierta tendencia histórica que explica el aumento de la participación femenina en el mercado de trabajo en Argentina, en relación al acceso de las mujeres a mayores niveles educativos y transformaciones socioculturales en las pautas relativas a la

Cuadro A2
Tasas específicas de empleo, desocupación y subocupación
por sexo, 1990-2002
Población de 15 a 65 años.
Total Aglomerados urbanos relevados por la EPH.

Año	Mujeres			Varones		
	Tasa de empleo	Tasa de desocupación	Tasa de subocupación	Tasa de empleo	Tasa de desocupación	Tasa de subocupación
1990	39,9	7,6	14,1	75,4	7,2	5,5
1991	40,3	7,1	13,6	76,1	6	4,8
1992	41,3	7,7	12,9	76,2	6,5	5,4
1993	41,3	11,7	14	74,7	8,3	6,4
1994	40,2	13,6	15,8	72,9	10,1	7,1
1995	38,7	20,3	17,4	68,4	15,6	9,2
1996	38,1	19,4	19,6	67,7	15,8	9,8
1997	40	17,9	18,3	70	13	9,9
1998	41,9	14,6	19,6	71	11,8	9,8
1999	42,5	15,6	20,1	69,2	13,3	10,3
2000	42	16,4	20	68,2	14,1	11
2001	41,3	17,2	21,8	65,5	17,5	12,7
2002	41,1	18,9	25	62,4	20,2	16,3

conformación familiar, la aceleración de la tasa de actividad femenina durante los noventa se asocia fundamentalmente con estrategias de economía doméstica según las cuales, tanto la salida laboral de la mujer, como la incorporación de más miembros del hogar al mercado de trabajo, estuvieron determinadas por el aumento del desempleo y el deterioro de los salarios reales del jefe.

En apoyo de esta interpretación, apuntamos que el mayor incremento relativo de la tasa de actividad femenina se observa claramente en aquellas mujeres provenientes de hogares de menores ingresos, lo que indica que dicho aumento estuvo vinculado, en mayor medida, a alternativas desarrolladas por los hogares para sortear el proceso de empobrecimiento asociado al desempleo y la caída de los salarios. Esto es, el aumento de la actividad femenina en los noventa se concreta en un contexto de contracción y precarización del empleo y de caída del salario real, y se explica fundamentalmente por la creciente incorporación de las mujeres de los hogares de ingresos bajos y medio bajos (Ministerio de Trabajo, 2005).

En síntesis, el crecimiento de la participación económica de las mujeres no aparece vinculado al mejoramiento de su situación en la sociedad, sino a procesos de ajuste estructural y reestructuración económica. En consecuencia, frente al cuadro de desocupación que golpeaba a las jefaturas masculinas de los hogares, las mujeres debieron salir a procurar empleo. Una investigación realizada por Andrea Andújar muestra que mientras que las mujeres se tuvieron que volver más fuertes frente a la urgencia de tener que ganar el pan para sus hijos, sus maridos se deprimieron, otros abandonaron a sus familias en medio de procesos signados por una enorme violencia, se volvieron un estorbo dentro del hogar, e incluso algunos se suicidaron (Andújar, 2005). Una mujer piquetera entrevistada por Isabel Rauber, afirma: “A nosotras no nos cuesta nada venir acá (refiriéndose al piquete), a pelear por nuestros hijos. Pero para ellos que han trabajado toda la vida es humillante. Esta política los ha humillado como hombres” (Rauber, 2002a: 110).

El tembladeral llegaba a grupos de clase media, empleados despedidos que encontraban grandes dificultades para encontrar nuevas ocupaciones y cuyas compañeras o hijas mayores se vieron forzadas a trabajar fuera de la casa para la sobrevivencia de la familia. En este escenario, las mujeres constituían un recurso para impedir que la caída fuera más abrupta (Barrancos, 2007).

Los “perdedores” (Svampa, 2005) en este escenario social han sido una muy amplia proporción de la población, que no sólo abarca los sectores bajos, sino también a la tradicional clase media argentina, cuyos integrantes se convirtieron en un porcentaje considerable de los “nuevos pobres”, al atravesar la denominada “línea de pobreza”¹⁵. Sin embargo, esto no supuso la homogeneización de la pobreza, sino que por el contrario, las clases sociales en su interior adquieren mayor heterogeneidad, a la vez que las fronteras sociales históricamente establecidas se vuelven más difusas.

Para Kessler y Di Virgilio, los nuevos pobres constituyen un estrato híbrido en tanto

“están próximos a los sectores medios en variables ligadas a aspectos económico-culturales que actúan en el largo plazo, como el nivel educativo y la composición de la familia –menos numerosa que la de los pobres estructurales– pero se asemejan a los pobres estructurales en el nivel de ingresos, el subempleo y la ausencia de cobertura social, es decir, en variables de corto plazo, producto de la crisis (2008: 39).

¹⁵ La “línea de pobreza” es comúnmente utilizada para medir la pobreza por ingresos. Se estima en base a una canasta “mínima” de alimentos, bienes y servicios. Aquéllos cuyo ingreso no alcanza a cubrir la canasta de alimentos se consideran “indigentes” y “pobres” a los que no alcanzan a cubrir la canasta total.

Así, la disparidad al interior de las clases sociales expresa lo que mejor describe la estructura social argentina de este momento, que es el aumento de la desigualdad social a través de una doble dinámica de polarización y fragmentación social (Svampa, 2005).

De este modo, el hecho que amplios sectores de clase media atravesaran la línea de pobreza no los ubica necesariamente en el mismo escalafón que a los y las pobres indigentes, cuya diferencia substancial entre unos y otros radica en la posibilidad de poder comer o no. Los pobres de nueva categoría, según Wortman (2008), son pobres de ingresos, pero generalmente tienen un nivel educativo más alto que los pobres estructurales y una experiencia de vida diferente, un capital social acumulado que les permite operar en el mundo de manera diferente.

En consecuencia, la nueva pobreza surgió así como un universo heterogéneo que reunía a los “perdedores” de cada categoría profesional. De acuerdo con Kessler y Di Virgilio, la heterogeneidad cuantitativa tenía su correlato cualitativo: la diversidad de perfiles socio-profesionales conllevaba trayectorias sociales diferentes en cuanto a las formas de socialización, los orígenes familiares, las carreras educativas y las historias profesionales. Así, una vez pauperizados, tal variedad de trayectorias estará en el origen de formas heterogéneas de experimentar la pobreza. “La pauperización es un trastocamiento general: todos los aspectos de la organización familiar ligados a lo económico e incluso las prácticas más rutinarias y normalmente menos problemáticas, son sometidos a revisión, modificación y supresiones (Feijoó, 1992 citado por Kessler y Di Virgilio, 2008).

En última instancia, puede suponer

“sacar a un hijo del colegio privado al que fueron sus hermanos mayores, modificar la dieta familiar, restringir el uso del automóvil o los viajes en colectivo, no asistir a una fiesta por falta de ropa adecuada, dejar de lado el club, la computación, la terapia, el fútbol, la música, las revistas, el cine, las vacaciones, la medicina prepaga y parte de la vida social, atrasarse peligrosamente en el pago de impuestos, abandonar el seguro y las cuotas de un crédito ya mitad pagado, adoptar en familia una nueva regulación de las frecuencias de invitaciones a comer en la casa, del régimen de visitas al dentista así como del consumo de luz y teléfono, entre tantas otras medidas” (Kessler y Di Virgilio, 2008: 40).

Siguiendo a Feijoó, también las capas medias luchan en los márgenes, sometidas a la vulnerabilidad, rotando alrededor de *la línea de pobreza*. Se trata de todos aquellos sectores que aun ocupados, son pobres y no alcanzan con sus ingresos a colocarse sobre la línea de pobreza en un hogar tipo. Se trata de una pobreza por ahora invisible a los ojos, esto es que se trata de una pobreza que se oculta al interior de los hogares y sólo se externaliza mediante múltiples estrategias personales dirigidas a paliarla. Estas estrategias aparecen reflejadas en *Cama Adentro*. Y es por eso que no hay acción colectiva

de empobrecidos en el sentido que sí la hay de los pobres estructurales. Porque la pobreza de las capas medias bajas, incluyendo a los trabajadores, no tiene básicamente el escenario espacial que rodea a la de los pobres-pobres y es intersticial, y resignada, aunque no pasiva (Feijoó, 2003).

La caída de amplios sectores de la clase media se constituyó en un proceso “puertas adentro”, dada la imposibilidad de poder distinguir el empobrecimiento por la apariencia de las viviendas y por el ocultamiento de dicha situación ante la mirada de familiares, vecinos y pares (Minujin, 2001). Como veremos, tal es el caso justamente del personaje femenino principal de la película *Cama Adentro* de Jorge Gaggero.

El proceso de empobrecimiento “puertas adentro” pone de manifiesto, además del cuestionamiento de la supervivencia material, la lucha por la supervivencia social, tanto en términos de pertenencia de clase, como de la propia subjetividad. La lucha por el reconocimiento plantea la inestabilidad que la crisis genera al sostenimiento de la propia identidad, grupal e individual. Frente a estas cuestiones, Feijoó (2001) se pregunta: *¿En qué posición de la estructura social se ubica a sí mismo un sujeto? ¿Que predomina más en la construcción de su identidad: la memoria o el presente; la referencia a sus hogares de origen o la trayectoria actual descendente?*

En última instancia, según Svampa (2005) lo que cambió a lo largo de este proceso es la distribución del poder social y, como tal, el modo en que cada uno se autorrepresenta, piensa y figura su destino social dentro de la sociedad. Esto condujo a la proliferación de luchas en torno al reconocimiento de la existencia, tanto en el plano económico-político, como en el cultural-simbólico, tal como abordaremos en la sección siguiente de este capítulo.

La otra cara de la fragmentación del destino de las clases medias arrojó como resultado un sector altamente favorecido por las políticas económicas de corte neoliberal, ya sea a través de la participación en procesos económicos vinculados a las políticas de privatizaciones o por la rentabilidad financiera. Así, junto con el crecimiento de los “nuevos pobres” se va constituyendo también un nuevo sector social, llamado los “nuevos ricos”, quienes se manifestaron espacialmente en un fenómeno también nuevo que fue el surgimiento de los *countries* y barrios cerrados en Argentina (Wortman, 2008).

Resistencias y luchas en democracia

En términos históricos, con la recuperación del estado constitucional en el año 1983 y la asunción de la presidencia por parte de Raúl Alfonsín, logra generarse el consenso de

la ciudadanía hacia la democracia, principalmente alrededor de cuestiones clave como el juicio a las juntas militares, así como un clima optimista en el que parecía haberse conformado un espacio público participativo (Suriano, 2005).

En este período aflora nuevamente la actividad política y sindical, en la que va a canalizarse una gran parte de las manifestaciones de resistencia que en el período anterior se expresaban a través de los movimientos sociales (Argumedo y Quintar, 2003).

Durante dos siglos, la historia de las luchas y formas de resistencia colectiva en Argentina estuvieron asociadas a las estructuras organizativas de la clase obrera, considerada ésta como el actor privilegiado del cambio histórico. Sin embargo, la pérdida de centralidad del conflicto industrial y la multiplicación de las esferas de conflicto pusieron de manifiesto la necesidad de ampliar las definiciones y las categorías analíticas (Svampa, 2005).

La aparición en escena durante los primeros años del retorno a la democracia de los nuevos movimientos sociales - entre ellos, el movimiento feminista, estudiantil, ecologista, pacifista, entre otros - venía a expresar una nueva politización de la sociedad, a través de la discusión de problemáticas vinculadas hasta ese momento con el ámbito privado y cuyas formas de acción emergentes tenían una base social policlasista, con una importante presencia de las clases medias (Svampa, 2005). A su vez, la acción colectiva registró nuevas inflexiones a partir del desarrollo de las organizaciones de derechos humanos (Jelin citado por Svampa, 2005)

Sin embargo, ese clima pronto habría de resentirse y daría lugar a un creciente desencanto ciudadano vinculado, por un lado, entre otros factores, al errático rumbo de la política económica del gobierno del presidente Raúl Alfonsín, que se veía fuertemente presionada tanto por el poder financiero como por las demandas gremiales; y por el otro, al desdibujamiento de la política de derechos humanos, al sancionar la Ley de Punto Final y Obediencia Debida¹⁶ (Suriano, 2005).

¹⁶ Fue una disposición legal dictada en Argentina el 4 de junio de 1987, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que estableció una presunción respecto de que los delitos cometidos por los miembros de las Fuerzas Armadas durante el Terrorismo de Estado y la dictadura militar no eran punibles, por haber actuado en virtud de la denominada "obediencia debida" (concepto militar según el cual los subordinados se limitan a obedecer las órdenes emanadas de sus superiores). Las leyes de Punto Final (1986) y de Obediencia Debida (1987), junto a los indultos realizados por Carlos Menem (1989-1990), son conocidos también como las leyes de impunidad.

Hacia fines de 1989, el retroceso en la participación política va a ser reforzado por la emergencia del menemismo¹⁷ que plantea un tipo de liderazgo mesiánico y delegativo. Esta pasividad alimentada por el nuevo liderazgo se agudiza con el crecimiento de la atomización social, derivada del aumento de la desocupación y la creciente precarización de las condiciones de trabajo al debilitar los ámbitos laborales como espacios de articulación política (Argumedo y Quintar, 2003).

De este modo, la consolidación de nuevas pautas de inclusión y exclusión social, en el marco de la puesta en marcha de políticas neoliberales, tuvo una repercusión importante en el plano de la acción colectiva, cuyo efecto más inmediato sería el repliegue de las organizaciones de derechos humanos y la subordinación de los grandes sindicatos a la política neoliberal vigente (Svampa, 2005).

Así, los sistemas de acción colectiva atravesaron un momento de crisis y debilitamiento, visible en la fragmentación de las luchas, la focalización en demandas puntuales, la presión local o la acción espontánea y semiorganizada (Svampa, 2005).

Crisis y resistencias de género

El “efecto no buscado”, en términos de Elster, por el sistema imperante neoliberal en la Argentina ha sido favorecer de algún modo la irrupción en la arena pública de voces polifónicas contrahegemónicas, que ocasionaron una renovación relativa del escenario y de los actores políticos; algunos de ellos incluso centrando sus reclamos en torno a identidades de género y sexualidades múltiples y diversas.

De este modo, en Argentina se han desatado importantes movimientos de resistencia a tales políticas a lo largo del período de implantación del modelo neoliberal, protagonizadas por actores sociales que confluyeron en la formación de novedosas, numerosas y diversas manifestaciones, en los cuales las mujeres han sido uno de los actores sociales fundamentales (Rauber, 2005).

Dentro de estos movimientos confluyeron distintos actores sociales, no sólo con el objetivo más inmediato de conseguir planes sociales por parte del Estado para paliar las consecuencias más urgentes de la crisis, sino también con el propósito de cuestionar el modelo económico vigente y, en última instancia, la misma estructura hegemónica del poder.

¹⁷ El período de la presidencia de Carlos Saúl Menem (1989-1999) es conocido como la década menemista, el menemismo o el menemato.

Bajo la efervescencia de muchos movimientos sociales y el clima de resistencia social vivido en este período, el cuestionamiento al modelo político y económico imperante, estuvo acompañado en muchos casos por un cuestionamiento respecto a las desigualdades de género, que fue posible dada la alta presencia y participación activa de mujeres.

Esta experiencia histórica nos permite pensar la paradoja del poder a través de diversos movimientos sociales y políticos en Argentina: Tal es el caso, por ejemplo, del Movimiento de Trabajadores de Desocupados surgido en la segunda mitad de la década de 1990 o, como vimos, de la organización de Madres de Plaza de Mayo. En ambos casos la potencia de estos movimientos radica justamente en reafirmar sus ejes identitarios: la identidad de trabajadores/as, en un caso, y la identidad madres en reclamo de sus hijos desaparecidos, en el otro. Sin embargo, ambos movimientos no han mantenido una relación de continuidad con el poder que constituye su potencia sino que, por el contrario, entre uno y otro momento, se produce una inversión significativa y potencialmente habilitante (Butler, 2001b), que les ha permitido reinterpretar su identidad, en ese caso como trabajadores/as y como madres, en términos desobedientes al poder imperante.

Piquete y cacerola, *la lucha es una sola*

Hablar del movimiento piquetero en Argentina supone retrotraerse a la década menemista signada por reformas neoliberales a nivel de la política económica en general y por la reforma laboral promovida por el gobierno, que incluyeron medidas, como: (a) la regulación y prohibición de las huelgas en los servicios públicos - condición exigida por el *establishment* empresarial y las entidades internacionales como el FMI y el Banco Mundial para la privatización de empresas estatales -; (b) la Ley de Empleo, que introdujo modalidades contractuales de trabajo precario, desarticuladas de los sistemas de salud, de seguridad previsional y de indemnización por despido; (c) la Ley de Accidentes de Trabajo, que impuso topes indemnizatorios en los accidentes laborales; (d) la reforma previsional, que sustituyó el sistema solidario anterior por uno de capitalización individual gestionado por administradoras de fondos de jubilación y pensión en su mayoría privadas (Palomino, 2005).

En consecuencia, a partir de la aplicación del nuevo esquema económico, se produce la ruptura de la unión sindical en Argentina en torno a la Central General de Trabajadores (CGT), tanto por el surgimiento en el año 1997 de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA), así como por la escisión misma de la CGT, entre la corriente oficial y la disidente, según su acuerdo o desacuerdo con la política económica del gobierno imperante. A su

vez, surge La Corriente Clasista Combativa, que nuclea a dirigentes sindicales de izquierda. La ideología marxista de sus dirigentes dota a su acción sindical de contenidos políticos, no obstante, las tendencias de exclusión social y de marginación del mercado de trabajo de vastos segmentos sociales los llevan a ejercer una trabajo de vastos segmentos sociales los llevan a ejercer una representación más vasta que la de la clase obrera, buscando incorporar en su acción a los excluidos del sistema (Palomino, 2005).

En el marco del gobierno de la Alianza, bajo el mando de Fernando De La Rúa, se produce un nuevo hito en torno al debilitamiento del trabajo en Argentina, a partir de la Ley de “Reforma laboral”, aprobada en el año 2000. Los contenidos de la ley distaban de constituir una verdadera reforma laboral. Los dos cambios más significativos que introdujo se referían a la transformación del eje de validación de los convenios colectivos y a la modificación del período de prueba previo a la contratación definitiva en las empresas. Por un lado, una empresa podía acordar un menor salario que el fijado por el convenio nacional de la actividad. Por otro lado, se extendió el período de prueba hasta seis meses y a un año en el caso de las pequeñas y medianas empresas, lapso durante el cual las empresas pueden prescindir de sus nuevos empleados sin indemnización por despido. Frente a este escenario de descontento popular y estancamiento económico los sindicatos, pese a que se alienaron todas las fracciones contra el gobierno, no lograron evitar que se profundizaran sus diferencias (Palomino, 2005).

Así, uno de los grandes cambios del último cuarto del siglo XX en Argentina fue la quiebra del sindicalismo tradicional y el desplazamiento de las formas de protesta social centradas en el mundo del trabajo. Consecuentemente, la protesta social y la composición de los actores involucrados también se transformaron, pues se produjo un desplazamiento de una sociedad centrada en el trabajo, en donde las demandas principales eran el aumento salarial o las mejoras en las condiciones de trabajo, a otra vinculada con el desempleo y el trabajo ocasional, asociada a la reivindicación del trabajo y de subsidios de desempleo. En ese momento los actores centrales de la protesta pasaron a ser los desocupados, trabajadores eventuales, beneficiarios de planes sociales estatales, quienes dieron forma a nuevos cuadros de protesta (Suriano, 2005; Palomino, 2005).

Además de las acciones desarrolladas por los sindicatos, el período da cuenta de la emergencia de nuevas formas de acción no institucional y organizaciones ligadas a una matriz territorial, como aparece ilustrado por las Mujeres Agropecuarias en Lucha, en un sector históricamente asociado al mundo masculino. “Como había sucedido en los 70 con las organizaciones de derechos humanos, como ocurriría luego con las organizaciones de

desocupados, las mujeres se encontraron en mejores condiciones que los hombres para redefinir la situación en medio de la crisis” (Svampa, 2005: 227).

Este período consolida un nuevo modo de politización de la sociedad que coloca en el escenario político argentino al movimiento social de desocupados como un actor clave. Al perder su vinculación al mundo del trabajo en medio del ocaso de la “sociedad salarial” (Castel citado por Svampa, 2005), la militancia territorial fue revistiéndose de nuevas dimensiones, al convertirse el *barrio* en el espacio de acción y organización. “Fue la politización de una experiencia de trabajo barrial lo que constituyó el núcleo de la acción contestataria y, rápidamente, el punto de partida para la organización y la acción masiva” (Svampa, 2005: 241).

“La autoorganización compulsiva de lo social abrió las puertas a nuevas experiencias, asociadas a la vivencia del barrio, la ruta y la calle, lugares desde los cuales los individuos buscaron reconstruir su identidad y reencontrar su dignidad. La acción colectiva trajo así consigo la idea de que otra identidad –y otro destino- era posible para quienes habían perdido su trabajo y habían visto interrumpida su carrera laboral. Un nuevo motivo de dignidad –que reemplazaría entonces la pérdida de dignidad del trabajo- podía comenzar a buscarse explorando y explotando la categoría “piquetero” y enterrando la de “desocupado” (Svampa, 2005: 242).

Así, surgen los movimientos piqueteros, a partir de 1996 y 1997 en el sur y el norte del país, extendiéndose luego a los asentamientos del Gran Buenos Aires, los cuales constituyen organizaciones de trabajadores y trabajadoras desocupados. En una primera instancia, localidades petroleras del sur del país, como Plaza Huincul y Cutral-Có en la provincia de Neuquén, presentaban un cuadro social agravado tras la privatización de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF). La desocupación alcanzaba a la mayoría de los hogares y se extenuaban las indemnizaciones. Así, en junio de 1996 comenzaron a gestarse reacciones espontáneas de los pobladores de ambas localidades, que decidieron cortar las carreteras nacionales y provinciales e impedir los caminos aledaños. Se inició así la forma de reclamo luego conocida como “protesta piquetera”.

Un año más tarde, en abril de 1997, en el contexto de un importante conflicto docente, nuevamente aquellas poblaciones recurrieron a los piquetes. Durante varios días de barricadas los manifestantes impidieron el tránsito en las principales carreteras como manifestación de protesta. Esta vez la protesta le costó la vida a Teresa Rodríguez, una humilde pobladora, debido a la brutal represión de los agentes provinciales. Así, su nombre devino un símbolo del compromiso de las mujeres en la protesta y su nombre fue objeto de diversas reivindicaciones (tal es el caso de la creación del Movimiento Teresa Rodríguez - MTR). A partir de este hito, se pone en evidencia el giro fundamental de las mujeres en

estas poblaciones, el desafío traído por el nuevo marco de precariedades, la falta de horizontes para los hijos y la emergencia de una nueva subjetividad que presagiaba conductas insospechadas (Barrancos, 2008).

Luego los reclamos llegaron a la provincia de Salta, cuando las poblaciones de General Mosconi y Tartagal vieron evaporarse los recursos de las indemnizaciones que habían recibido por ocasión del cierre de las actividades petrolíferas. Se trataba de familias abandonadas, con agotamiento de los recursos y al borde del hambre. Por lo que decidieron hacerse escuchar a través, una vez más, de cortes de carretera con una alta participación femenina, nuevamente.

Llevados a situaciones límites, piqueteros y piqueteras decidieron que era cuestión de vida o muerte exteriorizar su realidad, ponerla sobre el tapete, reclamando sus derechos en las calles y rutas del país, como un espejo de la sociedad que los expulsaba. “Cada piquete se erige como una muralla o límite humano a la pobreza en su rostro de exclusión y desintegración social. De ahí la necesidad de cerrar el paso, cortar rutas, calles, denunciando con sus cuerpos la situación de virtual destierro en el que se encuentran en su propia tierra” (Rauber, 2002a:111).

La calle cobra aquí un significado nuevo y múltiple: la calle es el lugar donde son arrojadas las personas desocupadas por el actual modo de producción; y desde allí, desde la calle, es donde en tanto excluidos presentan batalla por la recuperación de sus derechos y en defensa de la vida (Rauber, 2002b).

En Argentina, género y pobreza han interactuado de un modo particular y específico, dadas estas circunstancias históricas, en las que conviven la lucha por la supervivencia, la participación política, el cuidado de los hijos, el tránsito permanente entre lo privado y lo público, a tal punto que en dicho contexto algunas fronteras entre estos ámbitos se diluyeron (Rauber, 2002), por lo menos transitoriamente: mujeres piqueteras con sus niños en brazos cerrando el paso en los cortes de carreteras, hombres desocupados en sus hogares cuidando sus hijos, mujeres organizando las ollas populares en los piquetes, mujeres luchando en las barricadas.

Martha Rosenberg problematiza en este sentido, “La vida de los hijos depende tanto de que la función de la madre se cumpla individualmente, como de que se abandone para ser delegada en otras instancias de la sociedad. Que la función de unas mujeres como madres se prolongue en el espacio público puede ser leído como síntoma de la escena política” (Rosenberg, 1996: 259). De modo que la exteriorización en el espacio público de la función materna, a través de movimientos como Madres de Plaza de Mayo o Mujeres

Piqueteras, se vuelve un síntoma tanto del repliegue del Estado como de su accionar represor. Tanto por su accionar excesivo como por su retirada, el Estado abandona su función de cuidado y sostenimiento de la vida de la ciudadanía.

En el día a día, en la batalla por sobrevivir, las mujeres sufrieron no sólo el impacto general del desempleo, el deterioro de la salud, la educación, la pérdida de derechos, sino también las consecuencias que se derivan del rol que se les asigna culturalmente como proveedoras del sustento y responsables de la crianza de los hijos e hijas, de la atención de los ancianos y del cuidado de los integrantes del grupo familiar (Korol, 2004). En consecuencia, como contrapartida a la “feminización de la pobreza”, comienza a producirse la “feminización de la resistencia”, con un

“mayor protagonismo de las mujeres en la batalla contra las consecuencias de las políticas excluyentes y opresoras, en las búsquedas de alternativas de sobrevivencia, y más aún, de gestión autónoma de proyectos que intentan pensar nuevas formas de organización social y política, que recuperen la dignidad y el sentido de lo colectivo” (Korol, 2004).

De este modo, el rol asignado culturalmente empujó, paradójicamente, a las mujeres a salir del ámbito privado hacia el ámbito público. Por esta razón, frente a la crisis atravesada por el país, la “feminización de la resistencia” trajo consecuencias tanto en el plano de lo público, de lo doméstico, como de la subjetividad, que debieron ser apropiadas por las mujeres para apuntalar los procesos de resistencia (Korol, 2004). Como afirma Bárbara Sutton (2007), las argentinas tuvieron que reinventarse a sí mismas en orden a sobrevivir a la adversidad.

A la etapa fundacional del movimiento, marcada por la primera ola de movilizaciones, le sigue una segunda etapa, en los inicios del siglo XXI, en la que se produce la entrada de las organizaciones piqueteras en la escena política nacional, en tanto actor central de las movilizaciones sociales. Durante este período de crecimiento y visibilidad entre los años 2000 y 2002, las organizaciones piqueteras fueron desarrollando una creciente autonomía de acción, centrándose ahora en los espacios tradicionales de la política nacional, como es Capital Federal, el conurbano bonaerense y grandes ciudades del país (Svampa, 2005).

En el movimiento de rebeldía que estalló en diciembre de 2001 en Argentina, el símbolo fue una “cacerola”. Cacerolas golpeando contra el hambre, la miseria, la exclusión, expresando la presencia protagónica de mujeres en estos movimientos. Las cacerolas salieron así del espacio privado al espacio público.

“Si históricamente han sido uno de los símbolos del sojuzgamiento de las mujeres, de su reclusión en el dominio de lo privado, fue precisamente cuando el modelo neoliberal aniquiló las propias posibilidades de ejercicio del rol de la mujer en ese ámbito, el momento en que la consigna feminista ‘lo personal es político’, se generalizó en la práctica de miles de mujeres que ignoraban su origen. *Lo personal es político*. Una cacerola vacía es un arma de denuncia” (Korol, 2004: 28).

A través de la consigna “piquete y cacerola, la lucha es una sola”, se articulan (contingente e históricamente) las demandas respectivas de los sectores medios, expresados a través del *cacerolazo* y de los sectores populares, expresados a través de los *piquetes*. Además de articular demandas de distintos sectores, dicha consigna combina la participación política y la revuelta con lo doméstico, con la supervivencia, cuestionando transitoriamente la división entre ámbito público y privado.

En términos de obediencias y transgresiones de género, este ejemplo histórico nos muestra cómo de algún modo la obediencia a *raja tabla* de mandatos tan fuertemente internalizados, lleva implícito su propio cuestionamiento; es decir, para una mujer la lucha por la sobrevivencia de sus hijos e hijas, mandato por excelencia femenino, la lleva, en última instancia y bajo condiciones límite, a transgredir ciertas normas de género, en lo que se refiere al contenido de sus actuaciones de género (por ejemplo, participar activamente de marchas y protestas) y al ámbito de acción (la calle, la ruta), siendo sancionadas por parte de la opinión pública, según Rauber (2002a), como *malas mujeres*, *malas madres* o *malas esposas*.

Sin embargo, sus actuaciones de género, si bien desobedientes al género, continúan recreando modos de hacer, decir y sentir propios de la femineidad, poniendo en juego en la lucha callejera emociones y sentimientos como la abnegación, la entrega, la flexibilidad, la perseverancia, etc. Pero a la vez debemos atender a cómo estas características propias de la femineidad pueden ser reinterpretadas de un modo transgresor, en términos de su propio discurso y de su performatividad, cuestionando el orden establecido de género, pero a la vez teniendo su origen en modos obedientes de acción.

En este sentido, Bárbara Sutton (2007) considera que muchas mujeres lograron importantes transformaciones en el contexto de confusión social que acarrió la crisis en Argentina, pero esto no significa que las contradicciones desaparezcan instantáneamente. Mientras la crisis puede acelerar determinados cambios sociales, muchas prácticas enraizadas de género todavía persisten. Modos alternativos y hegemónicos de género pueden coexistir en un mismo movimiento social, incluso en un mismo sujeto o pueden adoptar distintos significados de acuerdo al contexto de la acción.

Un ejemplo de esta reinterpretación de acciones obedientes en acciones desobedientes con las normas de género podría ser, en el caso de las mujeres, las “ollas populares”, la cual constituye una tarea fundamental en el piquete, que consiste en preparar comida en grandes ollas para miles de personas, además de reunir previamente los alimentos. Para lograrlo, la mano de las mujeres es clave, así como para garantizar la sanidad interna, las guarderías infantiles y el normal funcionamiento de la vida en comunidad. Ellas son las que organizan la familia y el barrio, y también las organizadoras vitales de los piquetes (Rauber, 2002a), con lo cual reafirman su función familiar, y ahora comunitaria, de constituirse en garantes de la vida y de la supervivencia.

Sin embargo, el quiebre respecto al mandato de género está dado por el hecho que la tarea, en este caso de cocinar, es socializada fuera de las fronteras de lo doméstico, convirtiéndose en una estrategia de supervivencia colectiva, que logra ser politizada en tanto expresión de resistencia y de lucha. De este modo, el clima de protesta comienza a filtrarse en la vida cotidiana y a transformar su significado. Como afirman Borland y Sutton (2007), si bien el objetivo de los comedores comunitarios es satisfacer las necesidades alimenticias de los niños y niñas, algunos se convirtieron en centros claves de movimientos sociales desafiando al neoliberalismo, así como en lugares donde las mujeres se encontraban y comenzaban a cuestionar su subordinación colectivamente.

Cabe aclarar, que las mujeres piqueteras no se incorporan a la lucha buscando la liberación de la mujer o la igualdad de oportunidades, no se reconocen a sí mismas como feministas, sino que se incorporan a la lucha a partir del papel que entienden que les toca cumplir, en tanto madres y esposas, frente a un contexto de crisis y de hambre. En este sentido, para Cross y Partenio (2005), existen distintos perfiles de mujeres piqueteras. Entre las que han vivido en barrios periféricos toda su vida, algunas de ellas han desarrollado actividades sociales y políticas en el territorio durante los años '80 - en los procesos de toma de tierras- y en los '90 -como distribuidoras de alimentos otorgados por la asistencia social. Mientras que otras realizaron su primera experiencia de militancia política social en estas organizaciones piqueteras. En cambio, las que provienen de experiencias de militancia y activismo feminista, generalmente pertenecen -aunque no siempre- a sectores medios y buscan contribuir en la generación de una nueva conciencia femenina entre las mujeres de las organizaciones piqueteras (Cross y Partenio, 2005).

El dilema para ellas, de acuerdo con Cross y Partenio (2005), ha sido encontrar un espacio para discutir las demandas de género cuando la lucha por la subsistencia está lejos de ser ganada, siendo dos aspectos disyuntivos de la participación de las mujeres,

lo que da lugar a un "proceso de jerarquización de demandas" que plantea una falsa dicotomía entre "cuestiones de género" y "cuestiones de clase". Sin embargo, la discriminación que sufrían en términos de participación al interior del movimiento, hizo que fuera necesario reunirse entre mujeres para reflexionar sobre los obstáculos a los que se enfrentaban y a establecer claramente sus posiciones. Y así el debate se fue deslizando hacia tópicos que no eran abordados por los movimientos, de modo que se fue delineando una suerte de "agenda de género" que dio nuevo impulso a los espacios de mujeres, alrededor de problemáticas comunes, relacionadas con la salud, la planificación familiar, la violencia de género, y la despenalización del aborto, con el objetivo de instalarlas dentro de los movimientos como problemas políticos (Cross y Partenio, 2005).

Así, entendieron - tal como demuestra esta consigna del equipo de educación popular de la Universidad Popular Madres de Plaza de Mayo -, que no hay revuelta posible que no interpele tanto el modo en que se estructura el sostenimiento de la vida a nivel doméstico, como la configuración y orientación de nuestros deseos:

“revolución que nos revolucione a nosotras, que nos haga derrotar en primera instancia al opresor y a la opresora que hemos internalizado, y que nos ubican en el lugar de la obediencia y de los buenos modales. Revolución que nos permita reconocernos, e identificar la legitimidad de nuestros deseos, como motores posibles de una historia que merezca ser vivida... Revolución en la plaza, en las plazas recuperadas en las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Y revolución en la casa. En ese espacio que nos dicen que es privado, para que sea un espacio de batalla contra nuestra cotidiana opresión... Al salir a las plazas, es posible volver a discutir el lugar de las casas, desde nuevas perspectivas... Ahora que estamos recuperando las plazas, también podemos proponernos el debate sobre nuestros lugares en las casas, en la vida cotidiana” (Korol, 2004: 33).

En consecuencia, con experiencias de participación política previa dispar y con disímil pertenencia de clase, las mujeres movilizadas no solamente habrían hostigado las normativas demarcatorias de la ocupación de los espacios públicos, impugnando con su práctica tanto las fronteras de lo político como la circulación del poder. También habrían retado su posicionamiento en la esfera de la domesticidad cuestionando, con su práctica, los roles de género instituidos socialmente (Andújar, 2005).

La clase media movilizada

Una tercera fase de resistencia se abre luego de las jornadas del 19 y 20 de diciembre de 2001, bajo el gobierno de Fernando De La Rúa, que trajo consigo una mayor visibilidad y un crecimiento de las organizaciones de desocupados, así como el ingreso en la escena de otros actores sociales, como las asambleas barriales, fábricas recuperadas, ahorristas, colectivos culturales, etc.

A pesar de la heterogénea composición social de los protagonistas y del carácter espontáneo de los acontecimientos del 19 y 20 de diciembre de 2001 – donde fue evidente la participación de sectores de las clases medias de la ciudad de Buenos Aires que hasta entonces venían mostrando una especial pasividad -, la multitud se une al son de las cacerolas con la consigna “¡Qué se vayan todos!” (Argumedo y Quintar, 2003).

El acontecimiento del 19 de diciembre de 2001, marcó un punto de inflexión en términos de visibilización de los reclamos de amplios sectores medios de la sociedad. Grupos de vecinos comenzaron aquí y allá a golpear cacerolas espontáneamente en las puertas de sus casas. Pronto otros los imitaron y el ejemplo se expandió por todas las ciudades del país, a lo que luego sobrevino la “rebelión de diciembre de 2001” (Adamovsky, 2009).

Sin embargo, en términos de Adamovsky, los sucesos del 19 de diciembre no fueron una “rebelión de la clase media” no sólo porque hubo sectores importantes de esa “clase media” que no sólo no participaron, sino que tuvieron una conducta bastante opuesta a la de los que golpeaban cacerolas en las calles y plazas: “los que ganaron” (Svampa, 2004) en los años noventa y se refugiaron en *countries* y barrios cerrados.

A pesar de ello, dicho acontecimiento marcó un punto de inflexión en términos de visibilización de los reclamos de amplios sectores medios de la sociedad, que no por ello dejaban de ser fragmentados. Grupos de vecinos comenzaron aquí y allá a golpear cacerolas espontáneamente en las puertas de sus casas. Pronto otros los imitaron y el ejemplo se expandió por todas las ciudades del país, a lo que luego sobrevino la “rebelión de diciembre de 2001” (Adamovsky, 2009).

Y algo similar sucedió con los eventos del 20 de diciembre. En varias provincias hubo cortes de ruta y otro tipo de acciones protagonizadas tanto por trabajadores como desocupados, como por pequeños productores y comerciantes. En fin, la de diciembre de 2001 fue una rebelión protagonizada por múltiples sectores sociales y no se identificó expresamente con ninguno de ellos en particular. De acuerdo con Hernán Ouviaña:

“Una de las características distintivas de las asambleas es su alto grado de heterogeneidad ontológica, que lejos de suponer un eclecticismo caótico y amorfo, emerge en tanto diálogo permanente y transversal entre las diversas prácticas y corrientes de opinión al interior del campo popular. En este tipo de espacios (auto)organizativos, cientos de vecinos y vecinas confluyeron en pos de un proyecto colectivo, que se delinea en su propia acción cotidiana como una instancia fundamental de aprendizaje (con)vivencial” (Ouviaña, 2002: 10).

Así, lo interesante ha sido que los sectores no se movilizaron aparte, con reclamos exclusivos e identificándose como una “clase media” sino que, por el contrario, lo hicieron con una expresa voluntad de confundirse con el resto de la población (Adamovsky, 2009).

En consecuencia, la multiplicidad de los actores sociales que protagonizaban la protesta y los espacios de participación social, reflejaba bien las nuevas dimensiones que había comenzado a cobrar la estructura social argentina en términos de heterogeneidad, en la que no sólo fueron los sectores estructuralmente pobres los afectados por la cara “oculta” de las políticas de corte neoliberal. Se trató de una crisis que arrastró hacia el fondo de la estructura social a amplios sectores de la población, para quienes no estaba dentro de sus expectativas, en términos de biografía personal e historia de clase, la posibilidad de semejante “caída” ni la posibilidad de verse reflejados en la mirada de sujetos provenientes de sectores sociales más desfavorecidos. Sin embargo, la particularidad de esta crisis es que resultó aglutinadora de determinadas demandas de sujetos provenientes históricamente de diferentes clases sociales, que se articularon en estas circunstancias sociales bajo una misma consigna.

La riqueza y el interés empírico y teórico de este período radica en que supuso a la vez un proceso de grave explosión y descomposición social, junto con la creación de espacios políticos alternativos de participación y movilización social, compuestos por actores provenientes de sectores sociales e ideologías heterogéneas, unidos por una aparente confluencia de objetivos e intereses.

El año que siguió a la rebelión de diciembre de 2001, fue testigo de formas inéditas de autoorganización, lucha y solidaridad. El peor momento de la crisis despertó en buena parte de la población, los mejores instintos de cooperación, creatividad y vocación por lo público. Luego de la caída del presidente De la Rúa, comenzaron a surgir asambleas populares o vecinales en varias ciudades del país. Se formaron espontáneamente en cada barrio por la reunión de los propios vecinos, sin que ninguna organización las convocara, sólo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano llegó a haber cerca de 150. Durante 2002 y 2003 demostraron una enorme vitalidad: llamaron a la realización de cacerolazos masivos, discutieron la manera de reemplazar a los políticos profesionales por formas de democracia directa, exploraron salidas económicas para la crisis y establecieron fuertes lazos de solidaridad con otros movimientos sociales, como el de piqueteros y fábricas recuperadas, puestas a funcionar por los propios trabajadores, que por entonces tuvieron un gran florecimiento. Por todas partes 2002 y 2003 fueron años de intensa movilización callejera y experimentación de formas de organización novedosas. El Estado, los políticos y el capitalismo recibieron cuestionamientos profundos y de una masividad pocas veces vista (Adamovsky, 2009).

Según Ouviaña, la experiencia de las asambleas barriales “implicó el tránsito desde la mera deliberación a la búsqueda de concreción de formas de gestión popular solidaria a través de la implementación de comedores para sectores vulnerables, emprendimientos de trabajo colectivo, ferias artesanales, salas de asistencia médica, centros culturales, etc.” (2002: 1).

Así, el trueque, las asambleas, las empresas autogestionadas y la organización social, son diversas expresiones de organización popular que con variado éxito han buscado no solo una solución económica, sino también de generación de capital social y preservación de la identidad. El protagonismo en estas experiencias apareció así como una manera de evitar la centrifugación del sistema económico y de la propia historia personal y comunitaria.

En relación a las “empresas autogestionadas”, cabe mencionar que a fines de los noventa se inician las primeras experiencias de ocupación de fábricas en quiebra o abandonadas por los propietarios, y que son ocupadas y puestas en funcionamiento por los trabajadores y técnicos despedidos, organizándose bajo formas autogestionarias en cooperativas o iniciativas mixtas con apoyo del Estado. La recuperación de fábricas cobra mayor fuerza desde 2001, dando cuenta de novedosas respuestas ante la destrucción del empleo y de la recreación de una sociabilidad que se inserta en el fortalecimiento de la participación democrática en otras áreas de la sociedad (Argumedo y Quintar, 2003).

De acuerdo con Magnani (2003), los rasgos fundamentales que determinan una empresa recuperada son: (a) el control *de hecho* de los obreros sobre la fábrica, producto de un conflicto laboral que desemboca en una deserción empresaria parcial (vaciamiento, despidos, descapitalización, etc.) o total (lock out o abandono directo); (b) la horizontalidad de los trabajadores en la toma de decisiones y la igualdad de derechos; (c) un marco jurídico más o menos precario que garantice o permita su funcionamiento; (d) un marco de lucha contra la patronal, los sindicatos, el Estado o una combinación de los mismos.

Teniendo en cuenta lo precario de esta definición que dibuja los márgenes de una lista muy variada de fábricas, Magnani calcula que sobre el año 2003 había en Argentina unas 170. Según el autor, en comparación al resto de movilizaciones sociales, “la base productiva de las empresas recuperadas las hace esencialmente distintas; en sí mismas hay una forma de vida y de producción de la vida, que además implica reglas novedosas hacia el interior, cancheros de lo nuevo, lugares en donde las reglas de la explotación no existen” (2003: 167).

Así, las empresas recuperadas que se ponen en funcionamiento con diferentes modalidades de gestión de los trabajadores, apoyados por los y las assembleístas y otros movimientos sociales, muestran el replanteo del derecho al trabajo y el de la propiedad privada, en particular el de su jerarquía relativa en esta época de crisis económica. Frente a los valores de la sociedad mercantil que privilegia el derecho de propiedad, los assembleístas y los trabajadores erigen como principal el derecho al trabajo y ponen en discusión la función social de la propiedad. Esto no constituye una discusión puramente retórica, sino que se traduce en la instalación de procedimientos jurídicos inéditos, que anteponen la necesidad de preservar las fuentes de trabajo frente a las rutinas de quiebra y liquidación de bienes productivos que prevalece en el derecho mercantil (Di Marco, 2003).

A partir de la investigación llevada a cabo por Magnani junto a Naomi Klein y XX, que dio como resultado el estreno del documental *La Toma XX*, así como la publicación de su libro

Magnani titula su libro *El cambio silencioso. Empresas recuperadas en Argentina* (2003), fruto de su trabajo de acompañamiento a Naomi Klein y XX en su documental *La Toma* (2003), en referencia a la lucha silenciosa y a la vez transformadora de estos trabajadores y trabajadoras.

“Cuando consiguen finalmente poner en funcionamiento sus máquinas, estos hombres descubren que ya no son los mismos, que en ellos se ha operado un cambio que pasó por debajo del ruido de la lucha, de la ansiedad de esperar una nueva negociación, de romperse la cabeza pensando en cómo conseguir electricidad. Un cambio silencioso los ha transformado junto a su entorno y ha permitido que maten al que dentro de ellos les decía que la única opción era salvarse solos. Sin necesidad de discursos ni teorías, ellos han llegado a construir la base de un cambio político profundo que se teje día a día en la relación con los demás, y que finalmente teje a toda la sociedad y que ahora renueva las esperanzas para el resto” (Magnani, 2003: 9).

A su vez, al calor de los hechos de diciembre de 2001 se constituye el movimiento de “asambleas barriales” como construcción social de carácter horizontal, en donde se asumen las propias prácticas colectivas como prácticas políticas y plantean una crítica radical a las formas institucionales existentes. A diferencia de otros movimientos sociales, las asambleas no se articulan alrededor de una clase, género o demanda puntual, ya que en ellas convergen una multiplicidad de componentes y motivos de reclamo. Sus actividades abarcan tanto aspectos vinculados con la problemática nacional como cuestiones particulares propias de los barrios en los cuales están insertas.

Las diferentes asambleas se vinculan entre sí mediante comisiones específicas y participan de otras instancias de coordinación más amplias a nivel provincial y nacional. Fueron desarrollando experiencias alternativas de gestión comunitaria – compras colectivas, clubes de trueque, huertas, censo de vecinos desocupados, bolsas de trabajo, comedores populares – en un proceso de creciente inserción con la problemática barrial, articulando su trabajo con otras organizaciones o instituciones como escuelas, hospitales, fábricas tomadas y similares (Argumedo y Quintar, 2003).

Si bien las asambleas no puede ser tomadas como un "fenómeno" unitario, ya que ellas se diferencian entre sí tanto por la composición de "clase" como por las demandas que sostienen cada una de ellas, podemos sostener, como rasgo común, la constitución de la figura del "vecino", en tanto agente, que actúa y habla por sí mismo (Barbetta y Bidaseca, 2004).

Otra forma peculiar de respuesta a la crisis – desarrollada en Argentina a partir de mediados de los noventa y que toma especialmente fuerza alrededor de la crisis de 2001¹⁸ - es el crecimiento de la modalidad de clubes de trueque, caracterizada por la emisión de moneda social – *el crédito* –, la cual circula por fuera de los circuitos financieros como un espacio autogestionado y estructurado sobre la base de un sistema de encuentros semanales regulares. A su vez, la interacción y los intercambios entre clubes dieron lugar a la conformación de una red de clubes de trueque, generando formas novedosas de articulación y creación de consenso para resolver los distintos tipos de problemas relativos a la gestión (Primavera, 1999).

Si bien, la nueva pobreza surge como un fenómeno "puertas adentro", los clubes de trueque fueron un ámbito privilegiado para observar la interacción a nivel colectivo de sectores medios empobrecidos y sectores populares. Estos últimos accedían a ciertos servicios (como terapias tradicionales y alternativas, trabajo corporal) propios de los sectores medios urbanos, quienes, de su lado, trocaban esos servicios por bienes (como comida casera) y otros tipos de servicios más afines a los sectores populares (arreglos del hogar, mantenimiento). Sin embargo, el sentido otorgado a este intercambio por cada clase era diferente: mientras para los sectores populares significaba una suerte de ascenso social al acceder a sectores y prácticas identificadas con la clase media, para los empobrecidos

¹⁸ El primer club de trueque en Argentina se creó en 1995 y durante más seis años se desarrollaron iniciativas que, enlazadas, formaron redes de trueque en todas las provincias del país, además de la expansión a otros países de la región (Primavera, 2002).

era un indicador más de que la expulsión tan temida finalmente había tenido lugar (Kessler y Di Virgilio, 2008).

Tanto entre los piqueteros como en las fábricas recuperadas y en las asambleas se han ido ensayando distintos estilos de democratización en el debate y en la toma de decisiones colectivas que nutrieron formas contraculturales frente a los valores del neoliberalismo. Las fábricas tomadas por los trabajadores plantean alternativas al modelo vigente, ya que jerarquizan la cooperación en el trabajo humano y el pensamiento colectivo, evidenciando en los hechos el carácter parasitario del capitalista (Argumedo y Quintar, 2003).

